



— PUENTE POLÍTICO —



#OPINIÓN

CUESTA DE ENERO PARA LA DEMOCRACIA

La Reforma Electoral no es un simple ajuste técnico. Las propuestas apuntan a un mismo destino: uno en el que existan menos contrapesos y mayor control político



La Reforma Electoral que hoy se cocina en el corazón del poder no es un simple ajuste técnico. Es, en realidad, una redefinición de las reglas del juego democrático en México. Bajo el discurso de

la austeridad, se concentran propuestas que, vistas en conjunto, apuntan a un mismo destino. Uno en el que existan menos contrapesos y mayor control político.

El INE ha sido el eje incómodo de esta discusión. No por fallas estructurales, sino por su condición de árbitro autónomo. En ese contexto, fue alarmante la postura de **Pablo Gómez**, figura central en la elaboración de la reforma, al sostener que el INE no debe entenderse como un órgano autónomo en sentido pleno, sino como una entidad administrativa con independencia funcional.

Otro de los pilares bajo ataque es la representación proporcional. La narrativa es que los plurinominales son un exceso e innecesarios. Sin embargo, lo que rara vez se dice es que la representación proporcional es el mecanismo que evita que la democracia se convierta en una dictadura de mayorías.

Reducir o eliminar estos espacios no fortalece la legitimidad del Congreso; la empobrece.

La idea de la reforma es eliminar 132 espacios, 100 diputados y 32 senadores. Esto podría sonar atractivo en un discurso de austeridad, pero en realidad afectaría las minorías políticas, quienes no llegan por la vía mayoritaria.

La posible desaparición de los Organismos

Públicos Locales Electorales (OPLE) se presenta como una medida racional para reducir costos. Pero detrás del argumento presupuestal se esconde una lógica preocupante: la concentración del control electoral en una sola instancia nacional. Eliminar estas estructuras no sólo centraliza funciones, sino que reduce la capacidad de vigilancia y equilibrio territorial. En elecciones, la descentralización no es un lujo, es un seguro contra fraudes electorales.

Reducir 20% el financiamiento a partidos y al sistema electoral es un discurso atractivo, pero peligrosamente dictatorial. Las elecciones cuestan porque la legalidad cuesta. Exigir procesos más complejos, más fiscalizados y más vigilados con menos recursos es una fórmula

conocida: elecciones frágiles, instituciones débiles y mayor margen para la ilegalidad, incluso para que el crimen organizado intervenga en las votaciones.

Vistos por separado, cada cambio puede parecer razonable. Vistos en conjunto, revelan una tendencia clara: reducir autonomía, centralizar decisiones y debilitar contrapesos.

No se trata de modernizar la democracia, sino de administrarla desde el poder. La pregunta no es si el sistema electoral puede mejorar —claro que puede—, sino quién define esas mejoras y con qué intenciones. Una Reforma Electoral sin consenso amplio hecho por expertos en materia electoral, no fortalece la democracia, la pone en riesgo.

**Una reforma
sin consenso
pone en riesgo
la democracia**